

Hipótesis para una aproximación a la caracterización del período político y de la coyuntura política actual

Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
e

No se puede construir una estrategia política eficaz si se prescinde de un esfuerzo teórico por caracterizar el período político que vive El Salvador y que tiene en la coyuntura político-electoral del momento su punto más inmediato de inflexión. Este esfuerzo enfrenta dos obstáculos principales: por un lado y en el plano objetivo, el análisis tropieza con la vertiginosidad, amplitud y complejidad del cambio como fenómeno local-mundial, que hace bastante difícil identificar y seguir la tendencia de desarrollo de la situación actual, que tiene en la imprevisibilidad del futuro la única certeza posible; ello torna muy complicado prever probables escenarios de desenlace que orienten a los actores políticos en el diseño de líneas de acción para incidir en el curso de los acontecimientos; por otro lado y en el plano subjetivo, nos encontramos con la insuficiencia del marco referencial que hasta ahora hemos utilizado para explicar y predecir el comportamiento de la realidad social, pues la crisis del paradigma conceptual del Marxismo aún no logra ser superada, y todavía se encuentran en proceso de crítica y reformulación los viejos postulados, y de asimilación los nuevos planteamientos teóricos que permitan construir las categorías para entender las distintas condiciones en que se dan otros y los mismos problemas de siempre, sujetos hoy a la variable de un cambio tan aleatorio. Dadas las dificultades señaladas, lo prudente es partir

del planteamiento de algunas interrogantes elementales que se desprenden de bifurcaciones lógicas del curso previsible del proceso electoral de 2009, las cuales suponen asumir una cierta caracterización de la situación actual, que la hace particularmente definitoria para el futuro del país y cuyo desenlace será producto de las expectativas y las acciones de los sujetos sociales que se mueven en el escenario nacional y en el entorno regional, pero también de las condiciones acumuladas y heredadas del pasado inmediato y mediato. Los resultados de ese proceso decidirán varias disyuntivas a las que el país se enfrenta; por ejemplo, ¿habrá alternabilidad real o solamente alternabilidad formal?; ¿habrá alternabilidad democrática o crisis de alternancia?; ¿habrá continuidad autoritaria y reversión antidemocrática o habrá un relanzamiento del proceso de concertación y construcción democrática impulsado por los Acuerdos de Paz de 1992?; ¿triumfará el populismo social de derecha o el pragmatismo político de izquierda?; ¿será posible concertar una gobernabilidad democrática o se impondrá una gobernabilidad autoritaria basada en una mayor concentración del poder en el órgano ejecutivo?; ¿las reglas democráticas permitirán concertar un modelo económico-social incluyente y equitativo o se insistirá en el modelo concentrador, pauperizador y marginador?; ¿se avanzará hacia una democracia participativa o se insistirá en la democracia formal, excluyente y polarizante?; ¿se acentuará la polaridad política o se abrirá espacio para una tercera opción a partir de la derrota de una de las dos fuerzas principales?

El período político

Para intentar comprender el desarrollo de la coyuntura política y prever su posible desenlace en las elecciones de 2009, con el carácter definitorio que le atribuimos dadas las interrogantes que nos formulamos, se hace necesario enmarcarla dentro del período político que consideramos se inicia en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN y que comienza a dar señales de mutación en 1999 bajo el gobierno de Francisco Flores. Decimos esto porque en 1992 se da claramente un cambio cualitativo en la forma de dominación del Estado salvadoreño, en la medida que se formaliza el desmontaje de la dictadura militar implan-

tada en 1930-1932 y se abre paso un proceso inédito de democratización con la creación de nuevas reglas del juego político y la implementación de una reforma institucional para sostener e intermediar una relación diferente entre gobernantes y gobernados que intentó basarse más en la concertación y menos en la coacción.

Este proceso es precisamente el que se interrumpe durante el tercer período presidencial de ARENA y que da lugar a lo que puede llamarse una transición incompleta. El período a considerar tiene un carácter especial, pues contrasta con la historia del país de las últimas seis décadas, caracterizadas por la continuidad de una forma de dominación autoritaria, solo alterada por breves lapsos de relativas aperturas democráticas.

La dictadura militar que precedió a este proceso se asentó en una cultura autoritaria de auge arraigo en la sociedad salvadoreña, pero también se debatió con las aspiraciones democráticas de amplios sectores de la población que han eclosionado en varias oportunidades, como en 1944 y 1948, 1960-1961, 1972, 1977 y 1979-1980.

Durante los más de sesenta años de dictadura militar se pueden distinguir varios períodos políticos caracterizados precisamente por modificaciones en la forma de dominación del Estado, en los cuales primó casi siempre la coacción sobre la persuasión y mediante una mezcla de control ideológico, clientelismo político, represión física y psicológica y conformismo ciudadano se posibilitó a los sectores dominantes una convivencia social inestable o hegemonía precaria que, con ajustes periódicos, hizo viable un modelo político limitador y conculcador de derechos civiles y libertades democráticas basado en un modelo económico capitalista dependiente articulado principalmente alrededor de la agroexportación.

De manera general, estos períodos se pueden esquematizar así:

*** De 1930 a 1932:**

- Instauración de la dictadura militar.
- El Estado contrainsurreccional.

*** De 1932 a 1944:**

- La dictadura militar modernizante.

*** En 1944:**

- Crisis y apertura democrática.

*** De 1944 a 1948:**

- La restauración dictatorial-oligárquica.

*** De 1948 a 1950:**

- La transición del Estado autoritario liberal al Estado autoritario social.

*** De 1950 a 1960:**

La dictadura militar ilustrada. El Estado benefactor.

- La *Constitución* de 1950.

- Los derechos sociales.

*** De 1960 a 1961:**

- Crisis y apertura democrática.

*** De 1961 a 1972:**

- Dictadura militar aperturista y reformista.

*** De 1972 a 1979:**

- Dictadura militar en proceso de fascistización.

- Agotamiento de la vía electoral; construcción de un doble poder; movilización reaccionaria de masas; represión masiva y reformismo abortado.

*** De 1979 a 1980:**

- Crisis y apertura democrática.

*** De 1980 a 1992:**

- Dictadura militar reformista contrainsurgente bajo tutela norteamericana.

- La reinstitucionalización del Estado.

- El pacto de Apaneca de 1980.

- Las elecciones de 1982.

- La Asamblea Constituyente.

- La presidencia provisional de Álvaro Magaña.

- La Constitución de 1983.
- El Gobierno de Napoleón Duarte (1984).

*** De 1992 a 1999:**

- Proceso de democratización.
- Refundación del Estado: cambios institucionales y nuevas reglas del juego político.

*** De 1999 a 2008:**

- La reversión del proceso democrático.
- La escalada autoritaria.
- Centralización del poder político.
- Debilitamiento institucional.
- Agotamiento de las reglas del juego político.
- Confusión entre Gobierno y la cúpula del partido oficial.
- Exclusión política.

*** En 2009:**

- ¿Continuidad autoritaria? o ¿alternabilidad democrática?
- ¿Dictadura civil patrimonialista? o ¿relanzamiento del proceso democrático?
- ¿Democracia formal y restringida? o ¿democracia real y participativa?
- ¿Populismo social de derecha? o ¿pragmatismo político de izquierda?
- ¿Gobernabilidad autoritaria? o ¿gobernabilidad democrática?
- ¿Estado policíaco de leyes? o ¿Estado constitucional, democrático y social de derecho?

Podríamos concluir que la actual coyuntura política-electoral se enmarca dentro de un período político de transición que se inicia en 1999 bajo la administración del presidente Francisco Flores; decimos de transición porque indica el agotamiento del proceso de democratización dinamizado por los Acuerdos de Paz sin que exista aún una consolidación del modelo autoritario hacia el cual apunta la tendencia dominante, que encuentra sus principales obstáculos en la izquierda parlamentaria, en el entorno internacional proclive a la democracia y en las organizaciones civiles herederas del espíritu de aquellos acuerdos.

Tal agotamiento se expresa, en primer lugar, en el debilitamiento y desnaturalización de las instituciones creadas o refundadas por la negociación y la reforma constitucional como la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de la Judicatura, entre otras; en segundo lugar, en la ineficacia de las reglas del juego político-electoral para que la voluntad popular se manifieste de manera autónoma, transparente y legítima, constituyendo el mejor ejemplo de ello la desnaturalización e instrumentalización partidaria del Tribunal Supremo Electoral; y, en tercer lugar, en la polarización política derecha-izquierda que se traduce en la incapacidad de lograr acuerdos sobre temas de interés nacional y sobre una segunda generación de reformas que reimpulsen la democratización del país.

Este agotamiento es paralelo a una escalada autoritaria, que tiene, por de pronto, su manifestación más visible en el plano jurídico-político en una represión formalizada por leyes de excepción (*Ley Especial contra Actos de Terrorismo*, *Ley contra el Crimen Organizado*, etc.); también por medio de la represión sicológica mediática, cuyo principal objetivo es atemorizar y neutralizar a las organizaciones sociales, así como manipular la opinión pública.

Esta escalada pasa por una paulatina centralización del poder político en la Presidencia de la República, que tiene en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia su principal órgano ejecutivo, y que ha llevado a un virtual control de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, a la pérdida de identidad y autonomía de la dirección del órgano ejecutivo que se ha subordinado a la presidencia de ARENA, y a la confusión entre el Gobierno y la cúpula del partido oficial.

Este agotamiento se ha manifestado en dos oportunidades: en las elecciones presidenciales de 2004, cuando el partido oficial traspasó los límites de su propia legalidad y tuvo que recurrir de manera obvia a la propaganda sucia, al terrorismo psicosocial y a la manipulación de la normatividad electoral para asegurar el triunfo, quedando en entredicho la legitimidad y validez de los resultados de ese evento; y en 2006, cuando se dieron brotes de protesta civil ante el intento de desconocer el triunfo del FMLN en la Alcaldía de San Salvador.

El desenlace de esta transición estará marcado por una de las tendencias dominantes de la coyuntura que apunta a una creciente conflictividad

política y social y, en gran medida, dependerá de los resultados electorales de enero-marzo de 2009, los cuales decidirán en que dirección avanzará la sociedad salvadoreña a partir de una disyuntiva básica: la consolidación del proyecto autoritario o el relanzamiento del proyecto democrático. Cuál será el rumbo que tomará depende de cómo se combinen y tiendan a resolverse las principales contradicciones que se enfrentan en el escenario nacional: continuidad autoritaria versus alternabilidad democrática; populismo social autoritario versus pragmatismo político reformista; gobernabilidad autoritaria excluyente versus gobernabilidad democrática y concertada; democracia formal y restringida versus democracia real y participativa; alternabilidad real versus alternabilidad formal; crisis de alternabilidad versus alternabilidad democrática; conflictividad social versus estabilidad democrática; crisis política institucional versus reforma política institucional.

La etapa económica y el período político

Es sabido que para caracterizar un período político hay que hacerlo con relación a la etapa económica sobre la que se monta y la cual lo determina en tanto que la estructura de clases correspondiente configura, en principio, a los sujetos sociales que actúan alrededor del problema del poder. La etapa económica hace referencia a un lapso más o menos prolongado, en el cual predomina una cierta forma de reproducción, acumulación y distribución del capital, de tal manera que el cambio de una etapa a otra supone modificaciones cualitativas en el modelo económico de una determinada formación social, los cuales impactan en los mecanismos de dominación política; como los cambios en el modelo político tienden a ser más dinámicos que los cambios de la matriz económica, puede suceder que en una misma etapa se distingan varios períodos, sin que esto signifique una coincidencia mecánica.

Vamos a sentar como hipótesis que la formación social salvadoreña está pasando una etapa que arranca en 1989 con el ascenso a la presidencia de la república del licenciado Alfredo Cristiani, que llega hasta nuestros días y que, eventualmente, puede comenzar a transitar hacia otra en los resultados

electorales de 2009, especialmente si gana el ejecutivo el FMLN, en tanto esto supondría teóricamente un papel más activo del Estado en el campo económico-social, que incluso puede convertirse en una mayor intervención que ponga énfasis en otra forma de reproducción de la riqueza social; algunas medidas tomadas en ese campo por la administración Saca (Alianza para la Familia, Red Solidaria, FOSALUD, Escuela Saludable, etc.) parecen anticipar ese diferente papel estatal.

Decimos que desde 1989 se abre una nueva etapa económica en el país porque el eje de reproducción del capital dejó de ser predominantemente la agroexportación tradicional (café, algodón, caña de azúcar y camarón, principalmente) y se impulsó un modelo que pone el acento en las exportaciones no tradicionales, en el gran comercio de importación y en los servicios financieros, lo cual se acompaña con un abandono creciente de la agricultura y la ganadería y la renuncia a la promoción de una industria nacional; esto se enmarcó dentro de una concepción neoliberal que impulsó el debilitamiento del Estado a través de la privatización de sus activos, la desregulación de la economía y la apertura del mercado al exterior, que exigieron medidas como la reprivatización de la banca y el comercio exterior, la venta del patrimonio público, como las distribuidoras eléctricas, la administradora telefónica, etc., la eliminación de los impuestos al capital y la reducción de aranceles a la importación de granos básicos, la aplicación del impuesto al consumo (IVA), la eliminación del papel regulador y promotor del Estado en ciertas áreas como la vivienda (IVU) y los alimentos (IRA), la supresión del Ministerio de Planificación y Coordinación Económica y Social, el cese de las políticas sectoriales como la crediticia y de asistencia técnica al sector agrario reformado, la liberalización de precios, la llamada flexibilización laboral, que significó, entre otras cosas, la supresión de plazas en la Ley de Salarios y su reemplazo por contratos de servicios por tiempo determinado.

A partir de la segunda mitad del siglo xx, podemos identificar, grosso modo, cambios en el modelo económico básico articulado a la agroexportación tradicional, que prepararon la etapa económica actual (...1989-2008...) y que tentativamente podemos indicar en los siguientes tramos de la historia salvadoreña:

*** 1930-1948:**

- Crisis y reactivación de la economía agroexportadora tradicional.

*** 1948-1960:**

- La modernización de la economía salvadoreña.
- El impulso a la industria nacional.
- El crecimiento económico.
- El incremento de los precios internacionales del café.

*** 1960-1972:**

- El auge económico basado en la agroexportación tradicional.
- El reformismo norteamericano. La Alianza para el Progreso.
- El Mercado Común Centroamericano. Las industrias de integración.
- La sustitución de importaciones (la propuesta cepalina).

*** 1972-1980:**

- El reformismo militar abortado.
- La economía agroexportadora industrial financiera.
- La industria de exportación neta (zonas francas).
- La industria de la construcción y el turismo.

*** 1980-1989:**

- La economía de guerra. La declinación del PIB.
- El reformismo económico contrainsurgente.
- El incremento de la migración hacia Estados Unidos. Las remesas familiares.
- El cooperativismo del sector agrario reformado.

*** 1989-1992:**

- La aplicación tardía del Consenso de Washington.
- La implementación criolla del modelo neoliberal.
- El debilitamiento del Estado como sujeto regulador de lo económico.
- La pérdida de la oportunidad para un modelo económico concertado.
- La privatización de los bienes públicos.
- La apertura del mercado.
- La desregulación de precios

- El abandono del agro.
- La renuncia a la industrialización nacional.
- La desgravación del capital.

*** 1992-1995:**

- La reconstrucción del país y el crecimiento económico.
- La tercerización de la economía.
- La informalización de la economía.
- La flexibilización laboral.
- La gravación del consumo.
- El programa de reparto de tierras a los ex combatientes.

*** 1995-2000:**

- La patrimonialización del Estado.
- La delincuencia como negocio.
- La economía subterránea.
- La economía paralela.
- La pérdida del control territorial.
- La dependencia de las remesas familiares.
- La apertura al comercio de importación y a los servicios financieros.

*** 2000-2004:**

- El endoso a la economía norteamericana.
- La dolarización de la economía.
- Los terremotos, la vulnerabilidad social y la ayuda externa.
- Los tratados de libre comercio.
- La corrupción como eje de acumulación.

*** 2004-2008:**

- El populismo económico-social de derecha.
- La revisión del modelo neoliberal.
- Las medidas sociales compensatorias.
- La apuesta a los megaproyectos y al turismo ecológico.
- La crisis económica-social.

- El alza generalizada de precios y la disminución del salario real.
- La transnacionalización del capital financiero.

* 2009...

- ¿Cambio o continuidad en el modelo económico? ¿Concertación económica?
- ¿Reformismo pragmático de izquierda? ¿Continuidad y ampliación del populismo social de derecha?
- ¿Reconcentración de la propiedad agraria? ¿Retorno al Estado regulador de la economía?

Si se hace un paralelo entre los cambios económicos y los políticos, podrá advertirse que la tendencia dominante ha sido la autoritaria, que ha correspondido tanto a lapsos de declinación como de crecimiento económico, aun cuando se ha acentuado en los primeros y no ha estado reñida con la modernización y el reformismo durante los segundos. Por supuesto, la tendencia aperturista democrática siempre ha sido la dominada. Aunque ha emergido cada cierto tiempo durante breves intervalos, con excepción del período que se abre al finalizar la guerra civil en 1992 y que, con sus altibajos, se prolonga hasta el momento actual no obstante su traslape con la transición autoritaria a que nos referimos. Estos cortos períodos de apertura democrática han sido precedidos por crisis o conflictividad social que han obedecido más a factores políticos que económicos y han tenido como promotores principales a sectores de la Fuerza Armada y a la administración norteamericana.

En el caso del período 1992-1999, la apertura democrática fue impulsada por los cambios introducidos por la reinstitucionalización del Estado iniciada con las elecciones de 1982 y los Acuerdos de Paz, y el optimismo psicosocial que estos impregnaron en la población y en la clase política, pero también fue posibilitada por el auge económico generado por la inversión pública y por la cooperación internacional que inyectaron recursos para la reconstrucción del país; esto a pesar de que tales acuerdos dejaron pendiente el abordaje de la agenda económica-social y el crecimiento no fue acompañado de un fortalecimiento del aparato estatal, como lógicamente correspondía a la complejidad de las tareas de la posguerra, sino que, al contrario, se acentuó

su debilitamiento como producto de la aplicación mecánica de las recetas neoliberales.

El actual período político calificado como de transición, que ubicamos desde 1999 hasta nuestros días y que hemos caracterizado como una reversión del proceso democrático, tendería a corresponder a una declinación del crecimiento económico a partir de 1995, al agotarse el dinamismo derivado del proceso de reconstrucción. Este fenómeno, que llamaremos de escalada autoritaria, no sería respuesta a un auge social de la lucha reivindicativa, como cabría esperar en un período de acentuado deterioro de las condiciones de vida de la clase asalariada y trabajadora en general; más bien, el fenómeno estaría ligado a otros factores, como el auge de la violencia social, de la delincuencia común y del crimen organizado; la conformación de una clase política empresarial que tiene en el control del aparato estatal su principal resorte de enriquecimiento; la hegemonía de la corriente neoconservadora militarista de derecha liderada por el presidente George Bush y asociados; y el crecimiento del caudal político-electoral del FMLN, que hace de la alternabilidad en el Ejecutivo un evento probable, con los riesgos que ello implicará para los intereses espúreos de la élite política empresarial articulada alrededor del presidente Saca y la cúpula del partido ARENA.

La etapa económica y los cambios en la estructura de clases

Los cambios en el modelo económico imperante en el país han implicado modificaciones en la estructura de clases y de los grupos sociales que, a su vez, han incidido en las formas de dominación del Estado; de tal manera que para entender cuál es la forma que ha predominado en el período político considerado (...1992-1999-2008...) hay, por lo menos, que intentar rastrear qué posibles cambios pueden haberse operado en ese nivel de enlace entre lo económico y lo político de la formación social salvadoreña.

Pasada la crisis de los años treinta y a partir de la reactivación de la economía agroexportadora tradicional (del café, particularmente) y de la modernización del aparato del Estado (que permitió una mayor centralización de

sus funciones básicas como la emisión de moneda al crearse el Banco Central de Reserva, por ejemplo) iniciada por la dictadura martinista y continuada en los años cincuenta por los gobiernos militares de Oscar Osorio y José María Lemus, se impulsó un proceso de industrialización primaria (alimentos, bebidas, licores, vestidos, calzado, cigarrillos, etc.) alrededor del cual se conformó en alguna medida una cierta fracción de la burguesía nacional que se diferenció, por sus intereses en cuanto al eje preferencial de acumulación del capital, de la llamada oligarquía tradicional ligado al cultivo, beneficiado y exportación del café; de manera correlativa se fue formando un proletariado industrial y ampliando el sector de trabajadores del aparato estatal centralizado y posteriormente (en los años sesentas) de las instituciones descentralizadas (seguridad social, agua, telecomunicaciones, entre otras) que por sus reivindicaciones se diferenció también de las clases trabajadoras vinculadas a la explotación de la tierra, como los campesinos pobres y los jornaleros agrícolas.

Durante los años sesenta este proceso de industrialización se vio incentivado por la ampliación regional del intercambio comercial mediante la creación del Mercado Común Centroamericano que motivó a los gobiernos de turno, inspirados en las teorías de la CEPAL, a promover un proceso de sustitución de importaciones mediante las llamadas industrias de integración.

Fracasado el proyecto de integración regional, cuyas asimetrías de intercambio lo llevaron a una crisis que tuvo su culminación con la guerra El Salvador-Honduras (1969), así como el intento reformista militar del gobierno del coronel Arturo Armando Molina, que con su plan de transformación agraria se proponía fortalecer el mercado interno, en los años setenta la oligarquía salvadoreña buscó oxigenar la economía mediante las industrias de exportación neta (zonas francas) y la reorientación de parte de sus inversiones hacia los servicios financieros (bancos, asociaciones de ahorro y crédito, compañías de seguros, etc.), el turismo y la industria de la construcción. Esta reorientación del aparato productivo produjo un crecimiento del sector de los trabajadores de la construcción y de los empleados bancarios y de los servicios financieros que, incluso, se tradujo en esos años en un incremento de los niveles organizativos de los primeros y en un cierto despliegue or-

ganizativo sindical y de lucha reivindicativa de los segundos, con carácter autónomo de la patronal y Gobierno; corresponde también a este período un crecimiento del nivel organizativo y reivindicativo de los profesores de educación primaria.

Con la reforma de la tenencia de la tierra ejecutada en 1980 con propósitos contrainsurgentes por la Junta Militar Democristiana, se redistribuyó la propiedad rural, se formó un sector cooperativo agrario reformado y se amplió también la capa de los pequeños propietarios del campo, cuyos intereses se diferenciaron de los asalariados agrícolas.

De 1980 a 1989, las estructuras de clases y demográficas del país fueron modificadas por la guerra y la migración interna y externa. La economía tendió a sostenerse a partir del presupuesto militar financiado por la ayuda norteamericana, lo que propició la corrupción y el enriquecimiento de grupos vinculados directamente al aparato castrense y administrativo del Estado.

Los desplazamientos de población del norte y oriente hacia el occidente, centro y sur del país, así como el flujo de salvadoreños hacia los Estados Unidos, principalmente, trastocó los lazos familiares, vecinales, comunales y sociales; las remesas de dólares de los migrantes y la cooperación externa canalizadas hacia las ONG, prioritariamente a las dedicadas al trabajo humanitario, se convirtieron en sostén de una economía devastada por la guerra civil. Fue en este período en el que se dieron las condiciones para la formación de grupos irregulares como las «maras» y las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de armas, drogas etc.; lo mismo que para la ampliación del sector de comerciantes informales y los grupos involucrados en actividades cuasidelictivas de sobrevivencia; fue también este un período de declinación de la oligarquía agroexportadora (no tanto por la guerra como por la pérdida del valor del café en el mercado internacional) y de su contraparte social constituida por la clase trabajadora agroindustrial, como resultado no solo de los cambios económicos y las reformas estructurales, sino también de la guerra y la represión gubernamental.

El triunfo presidencial de ARENA en las elecciones de 1989 significó un cambio en el papel del Estado en la economía (se reprivatizaron la banca y el comercio exterior del café, entre otras medidas) y en el eje de acumulación

de las riquezas (de la agroexportación tradicional se transitó hacia las exportaciones no tradicionales, al gran comercio de importación y a los servicios financieros), con lo que se propició la conformación de una fracción burguesa financiera-importadora, con énfasis en el capital especulativo-usurero y parasitario del aparato del Estado.

En el otro lado de la estructura de clase, se fortalecieron organizativamente y cobraron protagonismo los empleados públicos y municipales, los comerciantes informales, los empresarios y trabajadores del transporte, los profesionales de la salud y la seguridad social, los empleados del órgano judicial, los movimientos de mujeres, los pobladores comunitarios (relacionados principalmente con la problemática medioambiental), con una organización más territorial que sectorial, y los grupos desclasados como las «maras», los desocupados menesterosos, los niños de la calle, etc.

Durante la administración Saca (2004-2008) se han producido dos fenómenos que modificaron la composición del bloque de clases dominantes y la correlación de fuerzas en su anterior: por una parte, la venta de los principales bancos a consorcios internacionales acentuó la transnacionalización de la oligarquía financiera; y por otra, la consolidación del grupo político-empresarial, formado por altos dirigentes del partido ARENA, a costa de usufructuar los recursos del Estado y aprovechar las ventajas que da el control del poder político. El fortalecimiento económico de este grupo le ha posibilitado, incluso, enfrentarse al sector financiero-importador por el control de la conducción de los aparatos partidario y estatal.

En este nuevo período han crecido y protagonizado la lucha reivindicativa los movimientos sociales territoriales, integrados principalmente por pobladores de comunidades rurales y semirurales ligados a la defensa del agua, al rechazo a la minería metálica, etc.; lo mismo ha sucedido con los migrantes residentes en los Estados Unidos (por sus derechos políticos), las capas medias profesionales (abogados y jueces, etc.), los empresarios y trabajadores de transporte urbano e interurbano, los consumidores y usuarios de los servicios públicos y privados, los estudiantes de educación media, los profesores de educación básica y media, los asalariados de las distribuidoras eléctricas privatizadas, entre otros.

Los cambios en el mundo y en el entorno regional y sus repercusiones en la situación nacional

Se discute poco la afirmación de que la situación al interior de un país está sobredeterminada por los cambios que ocurren en su entorno inmediato y mediato, en gran medida producto de la actuación de los sujetos (países, organismos, etc.) que tienen intereses geopolíticos y capacidad de incidir más allá de sus límites en el marco de determinadas condiciones objetivas. En el caso de El Salvador y en el período político considerado (1992-2008), esos cambios han repercutido con tal fuerza en el desarrollo de la actual coyuntura (2007-2009) que sus características no se pueden entender en toda su dimensión si se prescinde de ellos en el análisis, pues son esos factores externos los que casi siempre concurren como una explicación necesaria de los grandes sucesos nacionales y de la conducta de sus principales actores; dentro de tales factores destaca, sin mayor duda, la administración norteamericana, que ha estado puntual en los momentos más definitorios de nuestra historia moderna.

Intentaremos ubicar esos momentos y, de manera muy general, señalar la incidencia de ese factor externo preponderante, con relación a otros factores del contexto regional y mundial, en la configuración de los distintos escenarios internos de las cinco últimas décadas.

Sin mayor temor a equivocarnos podemos decir que el suceso político de mayor repercusión en América Latina sucedido en la segunda mitad de siglo xx fue el triunfo de la revolución cubana en 1959. Fueron tales los temores y expectativas que despertó que, en el plano teórico, puso en la agenda de discusión de la izquierda los límites de la lucha electoral y la viabilidad de la lucha armada como formas para acceder al poder político; y, en el plano práctico, motivó el impulso de movimientos guerrilleros en varios países de la región (Guatemala, Nicaragua, El Salvador), los que produjo un realineamiento del movimiento social y popular alrededor del asunto de la vía de la revolución y su carácter. Por otra parte, hizo que la administración norteamericana bajo el gobierno de John F. Kennedy (1960-1963) se replanteara su relación con América Latina y modificara su política impulsando programas desarrollistas como «La Alianza por el Progreso», intentando restarle justificación y base de apoyo al descontento popular que posteriormente sería el

caldo de cultivo de las organizaciones político-militares de inspiración socialista y de carácter antidictatorial y antiimperialistas que se desarrollaron en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo xx.

En los primeros años de la década de los años setenta se da el proceso chileno de la vía pacífica al socialismo, que terminó con el golpe de Estado de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende, electo democráticamente como candidato de la Unidad Popular, y que da inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta experiencia vino a fortalecer más la tesis de la inviabilidad de la lucha pacífica para tomar el poder político e introducir las reformas estructurales necesarias para alcanzar la justicia social; y, en cambio, fortaleció su idea contraria de que solo la lucha armada puede lograr el acceso de las clases subordinadas al aparato de Estado, así como su control, para garantizar la defensa y profundización de los cambios revolucionarios. Esta idea se corroboró en la conciencia de la fuerzas de la izquierda con la derrota norteamericana en Vietnam en 1975. El Salvador no escapó a este replanteamiento de las condiciones subjetivas para la conquista del poder político, que abrió un período de debate ideológico entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda, lo que también se tradujo en una recomposición organizativa del movimiento social de la ciudad y del campo.

Todo este proceso de renovación de la izquierda se da en el marco de un debilitamiento de la hegemonía norteamericana y de impotencia imperial para detener los avances de las fuerzas progresistas e impedir la instauración de regímenes militares de carácter nacionalista y reformista en la región latinoamericana (Perú, Bolivia, Ecuador, etc.)

De 1976 a 1980, la administración norteamericana está dirigida por el presidente James Carter, un demócrata liberal que impulsó la idea de que no bastaba la ayuda militar a los regímenes autoritarios de América Latina para detener la amenaza comunista, sino que era necesario presionar a esos regímenes para que respetaran los derechos humanos y convertir esta política en una condición para mantener aquella ayuda; tal política no solo demostró sus límites y contradicciones para humanizar los gobiernos militares, sino que también le abrió espacio a las fuerzas de oposición, tal como sucedió en el caso de Panamá, con los Tratados Torrijos-Carter que obligaron a los Estados Unidos a devolver el canal; de Nicaragua, con el derrocamiento de la dicta-

dura somocista y el triunfo de la revolución sandinista; y en El Salvador, con el golpe de Estado de octubre de 1979, que instauró una junta militar de corte reformista y catalizó la lucha insurgente y popular.

El fracaso de la política de promoción de los derechos humanos de James Carter fortaleció a los sectores ultraderechistas norteamericanos y propició el triunfo presidencial del Partido Republicano que durante ocho años (1981-1988) dirigió el Gobierno con Ronald Reagan a la cabeza, quien fue el principal promotor del neoconservadurismo económico inspirado en el programa neoliberal conocido como Consenso de Washington de los años setenta, y de la llamada guerra de baja intensidad, como una estrategia político-militar para derrotar a las fuerzas insurgentes en la región centroamericana y, al mismo tiempo, desarrollar un modelo de economía basada en el libre mercado y en la privatización de los servicios públicos.

Esa estrategia dio lugar en El Salvador a una ayuda militar sin precedentes, acompañada de un reformismo estructural (de la tenencia de la tierra, la banca y el comercio exterior) que buscó restarle base social a la guerrilla; en Nicaragua tal estrategia se concretó en la organización y sostenimiento de fuerzas contrarrevolucionarias para desgastar y asfixiar al Gobierno Revolucionario Sandinista, lo que propició su derrota electoral en 1989.

Por otra parte, el conflicto regional, atizado por la intervención norteamericana, dio lugar a un movimiento relativamente autónomo encabezado por los presidentes de Costa Rica y Guatemala por la pacificación a través de la vía diplomática, el cual se expresó en el Grupo Contadora (Panamá, Venezuela, Colombia y México, 1983) y en las cumbres presidenciales de Esquipulas (I y II); esta iniciativa en alguna medida le limitó el espacio político a la presencia norteamericana y preparó el terreno para la negociación de salidas políticas a las guerras civiles de Nicaragua y El Salvador. Este esfuerzo regional fue expresión de un movimiento internacional más amplio que culminó, en el caso de El Salvador, con la formación del denominado Grupo de Países Amigos (Estados Unidos, México, Francia y España) y cuyo antecedente fue la Declaración Franco-Mexicana de 1981 que reconoció al FMLN como una fuerza política representativa y que le abrió espacio a otras iniciativas que terminaron con llevar el conflicto a la agenda de la ONU, cuya mediación propició la salida negociada que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, en enero de 1992.

El lapso de 1989 a 1992 es especialmente significativo para el mundo y el país en lo particular; en 1989, llega a la presidencia de los Estados Unidos George Bush p., quien promueve una distensión estratégica con la Unión Soviética (URSS), pero también incrementa el intervencionismo militar, con los casos de Panamá (1989) e Irak (1991) como los más ejemplificativos. La prepotencia político-militar norteamericana y su irrespeto a las normas de derecho internacional y a la institucionalidad creada para salvaguardar la paz y la seguridad mundial se ven fortalecidos por acontecimientos de amplias repercusiones, como fue la caída del muro de Berlín (1989) y el desmoronamiento de la URSS (1991) con la consiguiente desarticulación del bloque de países del socialismo real en Europa Oriental.

Ese fenómeno produce la conformación de un unipolarismo político-militar bajo la indisputada hegemonía estadounidense; esto se da en el contexto del inicio del despliegue de la globalización de la economía y las relaciones sociales, como consecuencia de la última revolución tecnológica en los campos de la información y las comunicaciones; a la par de la globalización se incentiva la formación de bloques económicos y la exacerbación de las identidades locales, regionales y nacionales que dan lugar a una proliferación de conflictos que tienen en su base diferencias raciales, religiosas y culturales.

En Latinoamérica, este unipolarismo no se traduce en una mayor hegemonía imperial; por el contrario, en varios países de la región se gestan procesos que, sin llegar al conflicto abierto, ponen distancia de la tradicional tutela de Washington y constituyen un preámbulo de la formación de bloques de países que reclaman una mayor autonomía política y someten a revisión los lineamientos neoliberales promovidos por organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esos bloques últimamente son liderados por gobiernos como los de Brasil y Venezuela. Este fenómeno se relaciona con el agotamiento de los regímenes dictatoriales y se impulsan procesos de transición a la democracia, que se ven fortalecidos con la llegada de Bill Clinton a la presidencia, un demócrata liberal que ocupa la Casa Blanca en el período 1993 a 2000.

La caída del bloque soviético y los procesos de construcción de regímenes democráticos en Latinoamérica obligan a las fuerzas de izquierda a replantearse la estrategia sobre la vía de la revolución, lo que implica buscar un

reencuentro del ideal socialista con los principios y mecanismos democráticos para acceder y ejercer el poder político, haciendo de estos la ruta más viable para conquistar la justicia social; tal es, en síntesis, la innovación que introduce el planteamiento del denominado socialismo del siglo XXI, que inspira a varios procesos de cambio en la región.

Es en el marco de la consolidación de la hegemonía norteamericana y del debilitamiento del paradigma socialista tradicional que se da la negociación de la guerra en El Salvador, que culmina con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la cual, paradójicamente, fue propiciada por esta recomposición de la correlación de fuerzas a nivel internacional que posibilitó una especie de intervención «benigna» a favor de una salida política a la guerra civil, ante los límites que mostraba ya la solución militar impulsada hasta entonces, y la desaparición de la amenaza soviética, manejada como el principal argumento para justificar la ayuda al régimen salvadoreño.

Con la llegada a la Casa Blanca de George Bush h. en 2001 y durante los casi ocho años de hegemonía republicana, la política exterior norteamericana se ha caracterizado, con sus altibajos y matices, por la confrontación y el chantaje hacia aquellos que considera sus enemigos. En gran medida esta política ha sido una continuidad del reaganismo de los años ochenta, que se inspiró en el ideario de una nueva derecha obsesionada por la expansión mundial de la hegemonía imperial. Esta política neoconservadora, exacerbada por el atentado terrorista a las torres gemelas en Nueva York en septiembre de 2001, es consustancial con una nueva hipótesis de guerra construida a partir del derrumbe del bloque soviético que da origen a la época del unipolarismo.

Desaparecido el enemigo estratégico y en el marco de una nueva correlación de fuerzas que favorecería un clima de distensión, extrañamente se hizo necesaria una nueva apuesta a la guerra como solución de los conflictos, que se explica por una economía cuya salud depende del conflicto bélico; la hipótesis parte de la afirmación de que los enemigos son ahora el terrorismo, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico, entre otros, que ponen en peligro la paz y la seguridad, lo cual justifica una respuesta militar bajo la forma de guerra preventiva, tal como sucedió en los casos de Afganistán e Irak en 2002. Tal hipótesis subordina la paz a la seguridad internacional en desmedro de la libertad (autodeterminación de los pueblos) y convierte a los Estados

Unidos —por mutuo propio y ante la ausencia de un contrapoder de balance— en un gendarme mundial al margen de la legalidad e institucionalidad creadas por la humanidad para garantizar de manera equilibrada ambos valores. Esto ha llevado a la ONU y al sistema jurídico que la sustenta a una crisis de credibilidad y eficacia como mecanismos para preservarlos y restaurarlos cuando son violentados.

Ese expansionismo guerrerista neoconservador se da en el marco de cambios geopolíticos que implican un cambio de correlación de fuerzas a nivel internacional, que son resultado de la consolidación de la Unión Europea, del resurgimiento de Rusia y de la emergencia de nuevas potencias económicas como China, India, Brasil, etc. Esta situación se manifiesta en Latinoamérica en la disputa del mercado regional, hasta hace poco un feudo norteamericano formalizado mediante los tratados de libre comercio y regido por los lineamientos de organismos financieros como el BM y el FMI.

Otro elemento del contexto en que se da el unipolarismo norteamericano y que le inyecta precariedad es el preludio de una crisis global de incalculables dimensiones y efectos en los campos financiero, alimentario, energético y climático.

Para América Latina, esa recomposición unilateral de las relaciones internacionales alrededor del paradigma de la seguridad y bajo la hegemonía estadounidense se ha traducido en un endurecimiento de las medidas antiinmigrantes que, so pretexto de prevenir el terrorismo, han contribuido a agudizar más las difíciles condiciones sociales de aquellos países cuyas economías dependen en mucho de los flujos de dólares bajo la forma de remesas familiares; también han implicado presiones y demandas de cooperación en el combate al narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado; otra consecuencia ha sido el permanente tensionamiento con gobiernos que encabezan procesos políticos autónomos, al margen de la voluntad imperial, y aplican medidas antineoliberales, como el venezolano, el boliviano, el ecuatoriano, principalmente, y que se declaran impulsores de una especie de neosocialismo, caracterizado por la adopción de la democracia como camino hacia la revolución social; ello implicaría no solo la realización de elecciones periódicas transparentes y en condiciones equitativas de competencia, sino también la garantía y la tutela de los derechos fundamentales (organización,

expresión, información, etc.), así como el respeto a la alternabilidad en el gobierno, al pluralismo político e ideológico, a la concertación como método privilegiado para gobernar, a la división de poderes, a la independencia judicial y al control jurisdiccional sobre el poder político.

En cuanto al país y su relación con la administración de los Estados Unidos en el período considerado (1992-2008) puede decirse que los principales efectos de la doctrina de la guerra preventiva se han dado en el asunto migratorio, en el campo militar con motivo de la ocupación de Irak y en el combate al narcotráfico con la instalación de una base de monitoreo y una academia de policía (ILEA) en el aeropuerto de Ilopango; mención especial merece su impacto en el campo de la administración de la justicia penal, en donde de una visión garantista y democrática se ha pasado a otra eficientista y autoritaria, que limita derechos y garantías del imputado, así como el control de los jueces sobre las actuaciones de la Policía y fiscales, y se dota a la Fiscalía de atribuciones jurisdiccionales que la convierten en un ente inquisitivo, con el argumento de hacer más eficaz la persecución del delito. Este cambio obedece a una concepción conocida como «Derecho Penal del Enemigo», propia de la doctrina de la seguridad nacional, en la cual al ciudadano se le ve como un potencial delincuente a partir de su situación social, de sus antecedentes, de su apariencia y otros criterios similares, y al imputado se le considera como un objeto de punición del Estado y no como un sujeto de derechos y deberes.

Durante los gobiernos de ARENA esa relación ha pasado por dos etapas a partir de 1992: con Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol (1989-1999). La identificación y subordinación política se mantuvieron signados por los temas de la negociación de una salida política a la guerra civil, por el compromiso y cumplimiento de los acuerdos de paz y la cooperación para la reconstrucción y la transición democrática; y bajo las administraciones de Francisco Flores y Antonio Saca esa coincidencia de propósitos se convirtió en un verdadero sometimiento y abierta ingerencia en los asuntos internos. Basta señalar como ejemplos la dolarización de la economía, la firma del Tratado de Libre Comercio y el envío de tropas a Irak; habría que agregar, como otro elemento que caracteriza la relación en esta segunda etapa, la preocupación por la llegada del FMLN al ejecutivo, la cual se evidenció como una intromisión

pública a favor del partido oficial en la última elección presidencial.

Los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 en los Estados Unidos pueden plantear una moderación a esta relación con el triunfo de Barack Obama del Partido Demócrata y si ganara el candidato Mauricio Funes del FMLN. Un triunfo del candidato John Mc Cain del Partido Republicano, con matices, habría significado una continuidad de la política ingerente de George Bush h., sin mayores escollos si ARENA mantuviera el control del órgano ejecutivo.

Conclusiones

La caracterización hecha del período que arranca con los Acuerdos de Paz de 1992 deja por fuera otros procesos y actores que, indudablemente, han contribuido a la configuración de la coyuntura actual y que también incidirán en su desenlace. Esta limitación del esquema de análisis está basada en la combinación de dos variables principales y su interacción con una sucesión de los hechos políticos más relevantes acaecidos durante el lapso señalado, y consideramos que no lo invalida como una propuesta metodológica para inmovilizar y diseccionar el objeto de la reflexión y como un punto de partida que debe ser sucedido por una complejización de su estudio en que se integre el comportamiento de otros factores y se introduzca información concreta sobre los mismos. La relativa validez del esquema descansa en la hipótesis, que también es discutible, de que el rumbo histórico del proceso político del país en las tres últimas décadas ha estado determinado, en gran medida, por su interrelación con un factor interno, los cambios económicos y en la estructura de clases, y otro externo, los cambios en el contexto regional e internacional.

En la caracterización esbozada se ha omitido la incidencia del movimiento social — tanto sectorial como territorial — de las organizaciones civiles (ONG), de lo ideológico cultural, especialmente de los medios de comunicación social, de los cambios jurídicos institucionales y las políticas gubernamentales en materia social (salud, educación, etc.), de los cambios demográficos operados durante el conflicto político-militar y con posterioridad a este, y del

surgimiento de poderes paralelos al Estado como las estructuras del crimen organizado y las pandillas criminales o «maras».

Esas carencias de la caracterización pueden subsanarse mediante una discusión que propicie el desarrollo y el enriquecimiento de las grandes líneas trazadas y su relación con las dos variables consideradas. Pensamos que del estudio del período, tal como lo hemos delineado y no obstante las limitaciones analíticas dichas, puede concluirse que la coyuntura hereda, en el aspecto subjetivo, la institucionalización, crecimiento y protagonismo de un sujeto partidario que no existía como tal antes de 1992, en contrapartida con el desgaste del partido gobernante y el agotamiento de su proyecto económico social. Siempre en este aspecto, pero en contraste con la fortaleza política anterior, se advierte una debilidad de un movimiento social cuyo accionar, por lo menos en sus expresiones sectoriales tradicionales, se vio disminuido a partir de los Acuerdos de Paz, en parte, por el divorcio con la fuerza política que lo sustentó en los años setenta y del que se nutrió aquella durante la guerra civil. En cambio, en el plano objetivo, la coyuntura actual se desarrolla en el marco de un proceso de democratización en reversa en el que se enfrentan las pretensiones autoritarias de una minoría hegemónica y las aspiraciones democráticas de una mayoría que busca construir una nueva hegemonía basada en la concertación, participación e inclusión; también se da en medio de una acentuada crisis económico-social que está enriqueciendo a una élite y pauperizando a amplios sectores de la población, mayoritariamente de las clases medias; también en este aspecto, pero en el plano externo, hay que incluir como un factor sobredeterminante lo que acontece y acontecerá en los próximos meses, la contradicción entre los procesos autónomos de democratización y antineoliberales que se desarrollan en América Latina y la política intervencionista norteamericana, con los matices que pueden introducir los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

La confluencia de los factores anteriores nos permite afirmar que, nunca como ahora, se ha presentado la oportunidad a las fuerzas de izquierda de obtener un triunfo electoral que someta el sistema político a la prueba de la alternancia real y abra espacio a una gobernabilidad democrática. Nos atrevemos a decir que las condiciones objetivas para ese triunfo están dadas. Lo que sumado al debilitamiento de ARENA y a la inexistencia de otra opción de

derecha hacen propicio el relevo de partido y programa en el ejecutivo; lo demás depende de la capacidad del FMLN de articular las alianzas suficientes para cambiar la correlación electoral en ese sentido y hacer realidad esa posibilidad.